

533 osamentas

Virgilio Álvarez Aragón | valvarez@siglo21.com.gt



En la reciente encuesta de opinión realizada por Borge y Asociados para Canal Antigua y revista Contra Poder hay respuestas que muestran el fracaso de las maquinarias publicitarias que, en contra de toda evidencia, no solo tratan de negar la historia sino de modificar la trascendencia de los hechos. A la pregunta de si “¿Ha habido o no ha habido (sic) genocidio? 47% de la población respondió afirmativamente, frente a solo 36% que dijo que no.

El juicio, ampliamente divulgado y fuertemente cuestionado por los centros de poder hegemónicos, quiso ser presentado como un asunto de extranjeros contra el país y el intento por reiniciar un conflicto ya concluido. Sin embargo, según esa encuesta, a pesar de la propaganda en contra, las evidencias presentadas son suficientes para que casi la mitad de la población considere que ese crimen de lesa humanidad sí fue cometido por los altos mandos del Ejército. Que los enjuiciados gocen de la protección condicionada del poder económico, y que la sentencia final se haya diferido, no borra en el imaginario social la certeza sobre el crimen.

A ello debe agregarse que, según esa misma encuesta, 67% de los guatemaltecos considera que “el Gobierno se ha extralimitado en la aplicación de la fuerza policial” (...) al enfrentar a “las comunidades especialmente indígenas ante la explotación de las minas y proyectos hidroeléctricos”. Dos de cada tres guatemaltecos cuestionan el abuso policial, y con ello las formas como el régimen militar actual trata de proteger un negocio con el que la inmensa mayoría de la población, 70% según esa misma encuesta, está en desacuerdo. No hay, pues, mano extranjera soliviantando el ánimo de unos cuantos guatemaltecos desinformados; es la inmensa mayoría de la población la que no solo dice que sí hubo genocidio, sino que también desaprueba la forma brutal como la policía enfrenta las movilizaciones sociales y rechaza la minería.

Todo ello, a pesar de los millones de dólares y euros que Gobierno, mineras y agencias extranjeras han gastado en propaganda, compra de dirigentes y represión a los críticos y opositores.

Los guatemaltecos, al opinar protegidos en el anonimato de una encuesta, muestran que el terror de hace 30 años está de nuevo instalándose, casi por las mismas razones y motivos. Y con su opinión alertan a propios y extraños sobre las implicaciones que el terrorismo de Estado ha tenido y puede volver a tener en la sociedad.

El régimen militar, acosado por sus propias contradicciones, se ha despeñado en una ola represiva cada vez más violenta y sangrienta que la inmensa mayoría de la población, como muestra la encuesta, rechaza tajantemente. Incapaz de resolver los conflictos que a su interior se manifiestan, no solo es incapaz de desalojar de un centro preventivo a un reo ya condenado, sino que tiembla y se estremece ante la presión interna para que no todos los oficiales, en particular los jóvenes, sean considerados asesinos de amarrados ni ladrones de pertrechos.

Las 533 osamentas encontradas en donde funcionó la Zona Militar No.21 (hoy Creompaz), gritan con sus brazos amarrados y huesos fracturados la incapacidad del terror para construir un país justo, y exigen desde su doloroso anonimato informaciones, explicaciones y justicia. Una de esas víctimas, Matilde Col Choc, detenida el 13 de enero de 1983, fue recientemente reconocida científicamente, como lo han sido otras 53 víctimas varones. Cuatro niños de la familia Col Choc, según el Informe de Esclarecimiento Histórico, habían sido ejecutados extrajudicialmente en la montaña de Xalabé, Cobán, por miembros del Ejército el 25 de marzo de 1981 junto a 13 personas más, 6 de ellas también niños.

Nadie, desde los aparatos del Estado y del Ejército nos dice por qué, cómo y quiénes cometieron esos crímenes, los que tal parece ahora se repiten con igual saña y alevosía como pasó la semana pasada en Raxruhá, pero ahora bajo la mirada acusadora de la población que, insistimos, está diciendo en encuestas, de las que no tenemos por qué desconfiar, que es intolerable.

Cabe al régimen militar cambiar no solo su estrategia de terror y sangre sino, para abonar a la paz, identificar a los criminales de ayer (Cobán 1981 y 1983), resarcir a las víctimas y romper con el chantaje que desde cárceles y escondrijos le hacen hechores y cómplices de esos crímenes.

Fuente: Diario Siglo Veintiuno | 20 de agosto de 2014

<http://m.s21.com.gt/pupitre-roto/2014/08/20/533-osamentas>

Fuente de la imagen:

<http://famdeguagt.blogspot.com/2013/08/reinicia-exhumacion-en-base-militar-de.html>